

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Santiago de Cali, veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021).

RADICADO:	760013333 <b>00120120012101</b>
DEMANDANTE:	CARLOS FABIO BURGOS GARCÍA <a href="mailto:info@morenoygutierrez.com">info@morenoygutierrez.com</a>
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO <a href="mailto:notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co">notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co</a>

**MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO POVEDA PERDOMO**

Auto interlocutorio No. 4

**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**  
(Declara nulidad)

**I. ANTECEDENTES**

El señor Carlos Fabio Burgos García, actuando por intermedio de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la cual correspondió por reparto al Juzgado 1 Administrativo Oral de Buga y recibió el siguiente trámite procesal:

1. Fue admitida en contra del DAS, que en su momento se encontraba en proceso de supresión, con auto del 18 de enero de 2013.
2. La entidad constituyó apoderada y presentó escrito de contestación radicado el 21 de febrero de 2013.
3. Mediante proveído del 10 de julio de 2013, el Juzgado vinculó en el extremo pasivo de la Litis a la Nación – Ministerio del Interior, por solicitud del DAS.
4. Con memorial radicado el 30 de agosto de 2013 el DAS informó que no había sido posible allegar los antecedentes administrativos del demandante, toda vez que, como consecuencia del proceso de supresión en que se encontraba la entidad, toda la información se había remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
5. El 11 de marzo de 2014 se llevó a cabo audiencia inicial con la asistencia de los apoderados de la parte demandante, del DAS y del Ministerio del Interior y se dispuso el decreto y práctica de pruebas, entre ellas documentales que debían ser solicitadas a la UNP.

6. El 28 de mayo de 2014 se instaló la audiencia de que trata el artículo 181 del CPACA con la anuencia de todas las partes hasta el momento vinculadas, diligencia que fue **suspendida** y reanudada el 9 de junio de 2014, con una **nueva suspensión**.
7. Con memorial radicado por la doctora Lucy Mancilla Marulanda en **junio de 2014** (día ilegible en el sello de recibido), **se informó al despacho judicial que** *<<conforme a lo dispuesto en los artículos 3º y 18 del Decreto 4057 de 2011, prorrogado por el Decreto 2404 de 2013, la entidad que comparecerá al proceso a suceder procesalmente al DAS, (...) será LA ENTIDAD UNP, en virtud de lo contemplado en los artículos 60 del Código General del Proceso (...) lo anterior teniendo en cuenta que el citado expediente fue aceptado por dicha entidad receptora con los protocolos y cronogramas establecidos por las dos entidades definidos previo al cierre definitivo del DAS>>*.
8. El juzgado **reanudó** la audiencia de pruebas el 24 de julio de 2014, a la cual no asistió la apoderada del extinto DAS - cerrado definitivamente- y, en ella, dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
9. La doctora Mancilla Marulanda, el **1 de agosto de 2014** presentó escrito de alegaciones finales y a su vez **renuncia de poder**.
10. Con proveído **del 16 de marzo de 2015** el proceso fue remitido al Juzgado 1 Administrativo de Descongestión de Buga; despacho que, con auto del 5 de mayo de 2015 decretó prueba de oficio acudiendo a la figura del mejor proveer.
11. El **27 de agosto de 2015** el Juzgado de Descongestión profiere sentencia de primera instancia teniendo como demandados a la Nación – Ministerio del Interior y al DAS – en supresión. En esta oportunidad declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y la prescripción del derecho y, en consecuencia, desestimó las pretensiones de la demanda.

Nótese que, en las actuaciones adelantadas con posterioridad a junio de 2014 nada se dijo respecto de la terminación del proceso de supresión del DAS, la **sucesión procesal** que recaía en cabeza de la UNP, ni de la renuncia de poder presentada por la doctora Mancilla Marulanda.

## II. CONSIDERACIONES

El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020, creó con carácter permanente este Despacho en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por virtud de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con Acuerdo CSJVAA20-82 del 25 de noviembre de 2020, dispuso la redistribución de los procesos que se encontraban al despacho pendientes de sentencia en segunda instancia.

Como consecuencia de las anteriores medidas, el proceso de la referencia fue asignado al suscrito y, por tanto, se asumirá su conocimiento.

Una vez asumido el conocimiento de la causa judicial, este magistrado sustanciador, considera que, ante las circunstancias expuestas lo

procedente es declarar la nulidad de todo lo actuado desde la reanudación de la audiencia de pruebas que tuvo lugar el 24 de julio de 2014, para que el a quo acepte la sucesión procesal del extinto DAS en la UNP y adelante el trámite procesal que corresponda, con garantía de los derechos de acceso a la justicia de la UNP, a su debido proceso, defensa y contradicción del extremo pasivo, por las razones que se exponen a continuación:

## 2.1. De la sucesión procesal

La representación, por definición legal, corresponde a una relación jurídica de dos personas<sup>1</sup>, razón suficiente para que si deja de existir una de ellas, constituye tal suceso causa de terminación de la representación<sup>2</sup>.

En cuanto a la figura de la sucesión procesal, consagrada en el artículo 68 del Código General del Proceso tanto para las personas naturales como para las jurídicas, para estas últimas en caso de extinción, fusión o escisión y consiste en <<el reemplazo total de una de las partes procesales, con el fin de alterar su integración por la inclusión de un tercero en el lugar de aquella. La sucesión se surte por varias formas, dependiendo de si se predica de personas naturales o jurídicas, o de si la sustitución se origina por acto entre vivos o por la muerte de una persona natural o la extinción de una jurídica. Dicha institución jurídica está regulada en el artículo 60 del C.P.C. **La sucesión procesal constituye una figura procesal relevante pues desarrolla el derecho al debido proceso, al proteger a la parte que no conoce quien será su contradictor, facultándola no solo con el derecho a ser informada de la solicitud de sucesión, sino también con la potestad para aceptar o no la sustitución**>><sup>3</sup>.

Para el Consejo de Estado<sup>4</sup>

<<La sucesión procesal es la figura por medio de la cual una de las partes procesales es reemplazada totalmente por un tercero que toma el litigio en el estado en que se halle al momento de su intervención. Al sucesor se le transmite o transfiere el derecho litigioso convirtiéndose en el nuevo legitimado para obtener una sentencia de mérito, ocupando la posición procesal de su antecesor

(...)

La aludida sucesión puede tener diferentes causas dependiendo si se trata de una persona natural o jurídica, o si la sustitución proviene de un acto entre vivos o por la muerte de una persona natural o extinción de una persona jurídica. (...) existen los siguientes tipos de sucesión: i) sucesión procesal por muerte, ausencia o interdicción, ii) sucesión procesal de la persona jurídica extinta o fusionada y iii) sucesión por el cesionario derivado de acto entre vivos -venta, donación, permuta, dación en pago, entre otros (>>.

Bajo estos parámetros, para este Despacho es claro que, cuando se presentan las circunstancias jurídicas de la sucesión procesal, aunque la norma prevé que la sentencia producirá efectos respecto del sucesor, **aunque este no concurra**, esta última expresión no es óbice para

<sup>1</sup> Art. 1505 C.C.

<sup>2</sup> Art. 2189 núm. 5 C.C.

<sup>3</sup> Corte Constitucional, sentencia T-374 de 2014.

<sup>4</sup> Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso 13001233100020010069903, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero.

desconocer el derecho a concurrir al trámite, al debido proceso, no solo del sucesor procesal sino de la contraparte y, en esa medida, lo procedente es aceptar la sucesión para enterar, notificar, de modo tal que todas las partes intervinientes tengan conocimiento del cambio del sujeto que sufre uno de los extremos de la relación jurídico procesal.

En el caso objeto de análisis, mediante el Decreto 4057 de 2011 se dispuso la supresión del DAS y se ordenó el cese definitivo de las actividades derivadas del desarrollo de su función misional, proceso de supresión que debía concluir en el término de dos (2) años; este plazo fue prorrogado mediante Decreto 2404 de 2013 hasta el 27 de junio de 2014 y finalmente, fue el Decreto 1180 de la misma anualidad, el que dispuso como fecha final 11 de julio de 2014, es decir que a partir de ese momento el DAS desapareció por completo, circunstancia que, automáticamente hizo que, también desapareciera su representación.

Con ocasión de este proceso de supresión y la entrega de funciones misionales a otras entidades del Estado, la apoderada del extinto DAS informó al juez de conocimiento que, la entidad que fungiría como sucesor procesal en el asunto de la referencia sería la UNP y, es por ello que, el juez de instancia debió analizar los argumentos expuestos y, de considerarlo procedente, aceptar la sucesión procesal y tener como entidad demandada a esta última.

Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento en este sentido, el extremo pasivo quedó inexistente, no había ni demandada ni representante y, por tanto, también se quedó sin defensa y ello se evidencia con la falta de actuación en las etapas subsiguientes a la renuncia que del poder hiciera la apoderada del extinto DAS; incluso, al revisar las notificaciones de la sentencia de primera instancia se advierte que, el correo electrónico fue enviado, entre otras, a la siguiente dirección [notificaciones.judiciales@das.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@das.gov.co), luego se agregan las constancias de entrega a cada una de las direcciones electrónicas enviadas y esta no aparece.

## **2.2. De la nulidad procesal**

El juez en ejercicio del control de legalidad que le asiste, debe, en todas las etapas del proceso, revisar las actuaciones adelantadas y adoptar las medidas necesarias con el fin de sanear vicios con trascendencia, que generen nulidades, entendidas estas como irregularidades que se presentan y que tienen la virtualidad de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso y son causa de invalidez de las actuaciones surgidas con posterioridad al hecho que las genera.

Vale la pena resaltar que no toda irregularidad acarrea nulidad, por trascendencia que generalmente se refleja en la taxatividad de ellas. Pero si el proceso continuara en los términos actuales, en el hipotético evento de una condena contra el Estado, sería contra el DAS que es un ente inexistente, es decir, dejaría en absoluta confusión una sentencia que debería tener vocación de ser título ejecutivo, lo que evidencia la importancia de la corrección procesal a tomar.

Las causales de nulidad se encuentran enlistadas en el 133 del CGP y, al analizar lo expuesto en párrafos precedentes, a la luz del listado de ellas, este Despacho considera que, se ha configurado la prevista en el numeral 4 que expresa:

**<<ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD.** *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

(...)

8. *Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como parte, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*

(...)>>.

La norma también prevé que algunas nulidades pueden ser saneadas y que, en caso de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, esta solo puede ser alegada por la persona afectada; no obstante, para el presente asunto, es evidente que la parte afectada con la nulidad, la entidad que por ley se subroga o sucede a la entidad demandada, no tiene posibilidad, no puede en estricto sentido alegarla, toda vez que desconoce el proceso debido a que no se ha aceptado y notificado como sucesora procesal del desaparecido DAS, como tampoco se le enteró que no se le aceptaba como sucesora.

Por lo expuesto, de oficio, este magistrado procederá a declarar la nulidad de todo lo actuado desde la continuación de audiencia de pruebas instalada el 24 de julio de 2014, inclusive, dispondrá que se analice la sucesión procesal en cabeza de la UNP y, enseguida, se adelanten las actuaciones posteriores, con la mayor celeridad posible.

No sobra precisar que la sentencia de primera instancia también se afecta por esta declaratoria de nulidad, en los términos del inciso 5 del artículo 134 del CGP.

Adicionalmente, con el auto que resuelva la sucesión procesal, que será notificado en legal forma a la UNP, se solicita comedidamente al juzgado de origen que requiera a la UNP para que allegue copia de la información que al parecer fue remitida por esa misma entidad como anexo del oficio RAT\_422\_/12-00121 del 31 de julio de 2015 (fl. 297), toda vez que, el **cd** que fue aportado en su momento, cuando el expediente fue entregado a este Despacho, no reposa en el plenario.

En mérito de lo expuesto, se

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ASUMIR** el conocimiento del proceso 760013333**00120120012101**, conforme a las consideraciones expuestas.

**SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD** de todo lo actuado a partir de la reanudación de la audiencia de pruebas que se instaló el 24 de julio de 2014, inclusive.

**TERCERO:** el a quo deberá:

1. **VERIFICAR** el informe de sucesión procesal presentado por, quien, en su momento, fungía como apoderada del extinto DAS visible a folio 233 del plenario;
2. **DEFINIR** la sucesión procesal, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en esta decisión;
3. **SOLICITAR** a la UNP una copia de la información que reposaba en el cd que esa misma entidad allegó al expediente de la referencia con oficio RAT\_422\_/12-00121 del 31 de julio de 2015; y
4. **ADELANTAR** las actuaciones posteriores a la mayor brevedad posible.

**CUARTO: DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen, previo las anotaciones de rigor.

**QUINTO: NOTIFICAR** a las partes la presente decisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
**Magistrado**